



El presidente Calderón ante un país dividido

# Las elecciones en México dividieron a los estados pobres y ricos

POR LISA J. ADAMS

**Los** resultados electorales más cerrados en la historia de México —y la negativa del perdedor a aceptarlos— lanzaron a México al caos político y constituyen una amenaza potencial a la unidad de la federación y a la estabilidad de sus aún jóvenes instituciones democráticas.

Felipe Calderón, del mismo partido de tendencia conservadora que el presidente Vicente Fox, el Partido Acción Nacional, derrotó al candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones del 2 de julio por alrededor de 230,000 votos, es decir, un margen menor a 0.6 puntos porcentuales.

La contienda no sólo fue una de las más reñidas que haya habido en México; también fue una de las más amargas.

Calderón presentó a López Obrador, ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, como un hombre de tendencias dictatoriales que llevaría al país a la quiebra con impracticables programas populistas; a su vez, López Obrador afirmó que el único propósito de Calderón era ayudar a la gente adinerada e ignorar a casi 50 por ciento de los 107 millones de mexicanos que vive en la pobreza.

## López Obrador exigió un recuento

López Obrador afirmó que el fraude generalizado orquestado por la administración de Fox y por Calderón le había costado la elección y exigió un recuento total de los más de 41 millones de votos emitidos. El más alto tribunal electoral de la nación lo denegó y en su lugar ordenó un recuento parcial del nueve por

ciento de las 130,000 casillas electorales en las que consideró que había indicios de algún problema.

El 5 de septiembre, un día antes del vencimiento del plazo legal, el Tribunal Federal Electoral declaró a Calderón presidente electo. López Obrador, negándose a aceptar su derrota, ordenó a sus partidarios bloquear Reforma, la avenida principal, y el Zócalo, la plaza central, con enormes tiendas de campaña, marchas callejeras y “tomas” simbólicas de oficinas gubernamentales en protesta por el supuesto fraude generalizado que según afirmaba, le había costado la victoria. Los bloqueos duraron siete semanas, con la consiguiente frustración de los residentes ya hartos del tráfico en una capital de 20 millones de personas y con un costo de millones de dólares estadounidenses en pérdidas para los hoteles, restaurantes y tiendas de la zona.

Cientos de miles de admiradores “eligieron” masivamente y a mano alzada a López Obrador como su presidente “legítimo”, en una concentración por el Día de la Independencia encabezada por el ex candidato el 16 de septiembre. Sus seguidores se comprometieron a no reconocer la victoria de Calderón o cualquier institución gubernamental de la república “simulada” y prometieron solemnemente llevar a cabo actos de resistencia civil durante los seis años de la administración del “usurpador” presidente Calderón.

López Obrador no será reconocido como dirigente de México bajo la Constitución vigente, por las actuales instituciones democráticas o por la inmensa mayoría de los líderes

mundiales que ya han enviado sus felicitaciones a Calderón. Por consiguiente, al iniciar López Obrador un recorrido por toda la nación para difundir su mensaje revolucionario, tiene dos opciones: actuar como una figura opositora de equilibrio que puede ejercer presión sobre los legisladores para cambiar y fortalecer precisamente las instituciones que condena, o como un adversario que sólo se propone sembrar obstáculos en el camino de Calderón.

Ulises Corona Ramírez, un politólogo experto en federalismo adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México, opina que “el primer enfoque fortalecería el federalismo y a la sociedad en México y que el segundo debilitaría el federalismo porque dividiría a la sociedad, al país, a los estados de la república y a las ciudades en dos campos opuestos: ‘los que están conmigo y los que están contra mí’”.

La posición de intransigencia que López Obrador ha adoptado hasta ahora pone ante un serio dilema a los legisladores de su partido, el Partido de la Revolución Democrática, elegidos en el mismo proceso en el que, según el candidato presidencial, proliferaron los



- Foto: www.felipe-calderon.org

El ganador: el presidente Felipe Calderón durante su campaña electoral.

Lisa J. Adams es corresponsal de The Associated Press en la Ciudad de México. Durante los últimos siete años ha cubierto diversos temas en México y América Central.

fraudes. El partido, que siempre ha ocupado el tercer lugar después del ex gobernante Partido Revolucionario Institucional y del Partido de Acción Nacional, ganó terreno en las elecciones recientes y se convirtió en la segunda fuerza en el Congreso, una poderosa posición que podría utilizar para defender muchos de los cambios institucionales que solicita López Obrador.

Los miembros del partido también podrían representar una ayuda esencial para que Calderón pudiera avanzar en una serie de reformas en materia fiscal, laboral, energética y judicial. Muchos sostienen que dichas reformas son fundamentales para fortalecer las instituciones gubernamentales en México y a toda la federación democrática. Fox intentó fallidamente obtener apoyo para realizar esos cambios en un Congreso dominado por la oposición. En años recientes el gobierno federal ha reducido la parte del gasto que le corresponde a nivel subnacional. Más de 60 por ciento del gasto total corresponde ahora a los gobiernos locales y estatales. No obstante, los estados y municipios continúan siendo dependientes en gran medida de las transferencias federales.

### **Calderón necesita tender puentes**

Ahora que Acción Nacional ocupa la mayoría de los escaños en ambas Cámaras del Poder Legislativo y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional han indicado que desean respaldarlo en muchas propuestas, Calderón cuenta con mejores posibilidades.

Sin embargo, López Obrador advirtió recientemente a los legisladores del Partido de la Revolución Democrática —lo mismo que a los de Convergencia y del Partido del Trabajo, dos partidos más pequeños que han formado un nuevo frente político para apoyarlo— que deben rechazar todo contacto con Calderón.

No queda completamente claro hasta qué punto se ceñirán a esas instrucciones. Algunos legisladores del Partido de la Revolución Democrática y el propio fundador del partido, Cuauhtémoc Cárdenas, han expresado públicamente sus reservas sobre las acciones ahora emprendidas por López Obrador que han calificado de contraproducentes para el país y para el partido.

**La contienda no sólo fue una de las más reñidas que haya habido en México; también fue una de las más amargas.**

Pero otros legisladores siguen a su lado y se resisten al llamado de Calderón a trabajar en conjunto en forma armónica y multipartidista por el bien de los 31 estados del país y del Distrito Federal (Ciudad de México). Por el contrario, junto con otros líderes partidistas, han optado por actos de “resistencia civil”, el último de los cuales incluyó lanzar huevos contra el automóvil de Calderón, el montaje de una simbólica “clausura” de sus oficinas y desparramar mercancías en varias de las tiendas Wal-Mart como muestra del rechazo a lo que calificaron como la influencia injusta que

las compañías con grandes ganancias ejercieron para ayudar a la victoria de Calderón.

La campaña de López Obrador “Por el bien de todos, primero los pobres” —que ha incluido furiosas invectivas contra las clases acomodadas y la comunidad empresarial de México— ha puesto de manifiesto divisiones raciales y de clase social que datan de siglos atrás y ha subrayado las amplias brechas entre los ricos estados del norte que tienden a apoyar a Calderón y los estados del sur, más pobres, que respaldan a López Obrador. En México, 10 por ciento de los hogares concentran 42.1 por ciento del total del ingreso nacional mientras que sólo 23.4 por ciento corresponde a 60 por ciento de los hogares más pobres.

### **Las legislaturas estatales se dividen entre los partidos**

A nivel estatal, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) controla seis estados: Baja California Sur, el estado de Chiapas, al extremo sur; los estados de Guerrero y Michoacán, en la costa del Pacífico; el estado de Zacatecas, al norte, y la Ciudad de México, capital de la república, de la que López Obrador fue Jefe de Gobierno desde diciembre de 2000 hasta julio de 2005. Mientras ocupó el cargo, gozó de una amplia popularidad gracias a la implementación de subsidios gubernamentales, tales como descuento en transporte y programas de pensión gratuitos para los ancianos. Desde entonces, los ocho partidos en la Cámara de Diputados han manifestado su apoyo para que dicho programa de pensión se extienda a todo el país.

El partido de Calderón (PAN) controla nueve estados, desde Baja California y San Luis Potosí, en el norte, hasta Yucatán, en el sur.

Calderón, en busca del apoyo de los millones que no votaron por él y para fortalecer su mandato, prometió implementar políticas encaminadas a disminuir esas brechas y ha declarado que la reducción de la pobreza es una de sus tres prioridades.

También prometió formar un gabinete multipartidista que tome en consideración los distintos puntos de vista y está concertando reuniones con varios gobernadores.

Calderón manifestó que, “consciente no sólo de la diversidad política sino también de la diversidad social de cada estado, deseaba sostener una relación de profundo respeto y verdadero entendimiento con los gobernadores y los presidentes municipales de todos los partidos”.



Foto : [www.amlo.org.mx](http://www.amlo.org.mx)

López Obrador, el candidato presidencial perdedor, saluda a sus seguidores.

Continúa en la página 30

## Las elecciones en México dividieron a los estados pobres y ricos

Calderón es acertado al adoptar esta postura: los gobernadores —que antes decían amén a todo y trabajaban para una enorme maquinaria partidista que dirigió el país por décadas— ahora son elegidos libremente y representan no a uno sino a tres partidos importantes. Además, tienen una influencia considerable sobre quienes contendrán en sus estados a puestos federales y sobre los temas que abordarán en el Congreso una vez que hayan sido elegidos.

Los dirigentes estatales están lidiando con una serie de asuntos en los que el apoyo de Calderón sería apreciado: creación de empleos, atracción del turismo, lucha contra el extendido azote del narcotráfico y la reestructuración del estricto control del Poder Ejecutivo sobre la distribución de recursos nacionales entre los estados.

El Presidente ejerce un control casi total sobre los ingresos y asigna aquellos excedentes que provienen del petróleo y que no están previstos en el presupuesto para los programas de su elección, entre los que se cuentan los espacios publicitarios personales, a la vez que otorga una mayor o menor cantidad de los recursos a los estados, de acuerdo con sus tendencias políticas.

En opinión del profesor Corona, la distribución de recursos federales en México no es justa, igualitaria ni honesta.

El Congreso de México aprobó recientemente una ley que procura un sistema distributivo más justo al otorgar a los legisladores mayor participación en la asignación de fondos y permitir a las ciudades elevar sus propios ingresos fiscales.

Si este sistema se pusiera en práctica, podría ayudar al fortalecimiento del federalismo en México, dijo Carol Weissert,

politóloga de la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee, Florida, y directora de *Publius: The Journal of Federalism*. “El hecho de que verdaderamente esté en primer plano es ya muy importante”, declaró.

Pero quizá uno de los temas que posiblemente tenga un impacto inmediato en el sistema federal mexicano es la crisis que se vive en el estado sureño de Oaxaca, donde los maestros en huelga y los simpatizantes radicales tomaron las calles de aquella acogedora ciudad turística que ha servido de rehén durante cuatro meses en demanda de aumentos salariales y de la renuncia del gobernador del estado.

A pesar de los crecientes llamados para que interviniera, Fox —un importante partidario del federalismo— declaró que se trataba de un asunto que recaía esencialmente bajo la jurisdicción estatal, y que a la presidencia le correspondía únicamente asesorar las negociaciones, no enviar fuerzas policiales federales o al ejército a restaurar el orden. No obstante, Fox envió más de 4,000 policías federales a Oaxaca en octubre de 2006 para acabar con la protesta de maestros y miembros del sindicato. Además, está consciente de que pocos han olvidado la brutalidad con que los estudiantes fueron masacrados por las fuerzas gubernamentales durante las manifestaciones en la Ciudad de México en 1968 y 1971.

Si Fox, o Calderón en su momento, decidieran usar la fuerza pública mientras los estados siguen luchando por afianzar su independencia de la presidencia, “enviarían el mensaje negativo [...] de que quizá el viejo sistema centralizado está más a la mano de lo que algunos piensan”, dijo Weissert. 